

Fecha Sanción 10 Dic. 1999
Publicado en Boletín Oficial B.O.N° 3/00 - PAG. 67/8
Extracto DECLARASE LA NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE DEL DCTO. HF N° 2224/97.-

San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Diciembre de 1999.

VISTO:

El Expte. "E" N° 12720/97 y el Decreto H. y F. N° 1970/97; y

CONSIDERANDO:

Que la autorización concedida a la empresa Inter World S.A., fue de carácter precario y condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 4217 y al artículo 3° del Decreto N° 324/97;

Que en Dictamen N° 776/97, A.G.G. expresó que, los permisionarios debían cumplimentar una serie de requisitos establecidos con la finalidad de resguardar los intereses del Estado, especialmente aquellos útiles para acreditar la solvencia moral y patrimonial del ente concesionario, referidos tanto a la persona jurídica en sí misma como también a los miembros de su directorio y/o representantes;

Que dichos permisionarios omitieron adjuntar certificados de conducta de la totalidad de los directivos y/o representantes legales de la empresa, extremos estos insoslayables por ser así exigidos por Decreto N° 324/97 y dada la naturaleza personalísima de la concesión precaria;

Que repuestos los actuados ante el Poder Ejecutivo, se advierte la inexistencia de la documentación respaldatoria de los extremos requeridos por la Ley N° 4217 y el Decreto H. y F. N° 1970/97, por lo que correspondió oportunamente se diera participación a la Asesoría General de Gobierno a efectos que dictamine sobre el particular

Que la mencionada Secretaría de Estado emitió Dictamen A.G.G. N° 411/99 en el que se indica que acto administrativo -por el que se otorgó el permiso precario de explotación de juegos de azar- adolece de vicios que lo invalidan por afectar elementos esenciales del acto administrativo, los que por su gravedad, lo convierten en un acto nulo de nulidad absoluta conforme lo dispuesto en los Artículos 32° y 33° de la Ley N° 3959. Como consecuencia de ello, debe ser revocado de inmediato en sede administrativa, considerándose además que este proceder administrativo es jurídicamente posible y lícito, ya que por la naturaleza precaria del permiso otorgado el mismo es libre y unilateralmente revocable por la administración, no generando por tal motivo derecho a compensación ni reparación alguna a favor del precarista;

Que los doctrinarios del derecho administrativo entienden de consuno la procedencia de la anulación oficiosa, toda vez que un acto administrativo se encuentre afectado o en pugna en sus elementos componentes con el ordenamiento legal imperante, en este sentido puede citarse a Comadira Julio Rodolfo, en su obra la Anulación de Oficio del Acto Administrativo, ed. Astrea Bs. As. 1981 pág. 40 donde se expresa citando a Romanelli que: "... si la conformidad con la ley constituye el antecedente obligado sobre el que debe imprescindiblemente apoyarse el interés específico que informa la acción administrativa: es evidente, en tales condiciones, que un acto inválido no podrá nunca satisfacer el interés que anima y guía la acción administrativa. De lo cual fluye, en consecuencia que la simple y objetiva invalidez constituye razón suficiente y necesaria para el ejercicio de la potestad de anulación que bajo tal aspecto no tiene limitación alguna";

Que estos registros amén de ser exigidos por expresas normas legales son particularmente imprescindibles en un tipo de permisión como la otorgada puesto que las cualidades morales, personales y negociales de los directores, representantes, síndicos, etc. de la empresa deben ser acreditadas de forma indubitable, de forma tal que se satisfaga de manera superlativa el interés público comprometido en todo el accionar estatal;

Que la omisión incurrida por parte del precarista respecto de acreditar la inexistencia de procesos pendientes, judiciales y/o administrativos contra el Estado Provincial, no sólo configura otra alteración a las exigencias legales, sino también una grave falta por parte de los permisionarios a la transparencia, seriedad, moralidad y buena fe de la que deben inexorablemente estar imbuidos todos los actos administrativos de base consensual;

Que en este caso particular, cabe maximizar el dispendio de actividad administrativa de autotutela intradministrativa procurando establecer la responsabilidad orgánica y funcional de implicancia en el otorgamiento del instrumento viciado de ilegitimidad;

Que con respecto al último tópico considerado, cabe que la tarea investigativa sea encausada vía la Fiscalía de Estado por ser el órgano competente a tal fin, por expresa disposición constitucional;

Que la revocación también es procedente en este caso particular, toda vez que la concesión otorgada se realizó sobre una permisión de tolerancia para la explotación de juegos de azar electrónicos, y que sobre este tipo de actividades el Estado siempre conserva las facultades inherentes al poder de policía, entre las que se encuentra la de prohibir o revocar las autorizaciones que sobre que hubiere otorgado oportunamente;

Que Asesoría General de Gobierno en Dictamen A.G.G. N° 411/99 también indicó que: "Debemos apuntar otra nota sobresaliente del instituto sub examine, la que está dada por su substrato consensual derivado del conocimiento y asentimiento de parte del precarista de las condiciones con que asume y emprende la actividad o explotación a título precario, por tanto se comprende en la noción un elemento cognitivo y volitivo objetivo por el que se presume jure et de jure, que tal estado de situación es aceptado y querido por quien asume una actividad en esas condiciones"; indicándose más adelante en el mismo dictamen que: "Es decir que el negocio jurídico precario visto desde la parte de la voluntad estatal tiene como causa determinante (motivo del acto administrativo que lo dispone) su transitoriedad temporal y la constitución u otorgamiento de derechos sin vocación de continuidad ni generadores de las obligaciones que importan otros contratos o concesiones...", "... Todo lo hasta aquí expuesto nos lleva a otra nota característica diferenciadora de lo precario con respecto a cualquier otro derecho que se pudo haber constituido por parte de la administración como derecho subjetivo, que es en el caso de estos últimos el acto de revocación debe ser siempre motivado derivando en algunas circunstancias en una indemnización por parte del Estado, en cambio estas notas no se presentan en el acto precario ya que en éste los derechos nacen debilitados y en los cuales la administración no está inexorablemente obligada a dar explicaciones fundantes del acto cancelatorio, o como dice J. F. Linares, "la revocación se produce aquí por antojo"; Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó en similares circunstancias que: "El permiso administrativo otorgado para la apertura de una casa de juegos de azar, no es propiamente un contrato dentro del espíritu de nuestras leyes, a cuyo cumplimiento puede ser obligada la administración, sino simplemente una licencia que otorga el Estado concedente, en ejercicio del poder de policía y para la protección de la moral pública puede en cualquier momento revocar y prohibir (Fallos, 168-83); Que el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado para el dictado de un instrumento del tenor del presente conforme lo establecido por los artículos 149° inc. 22) y 162° de la Constitución Provincial, en concordancia con la Ley N° 3559;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Declárase la nulidad absoluta e insanable el Decreto H y F. N° 1970/97, y revocáse por ilegitimidad la concesión precaria para la explotación de juegos de azar otorgada a la firma Inter World S.A. mediante Resolución A.G.J.S. N° 1521/97.

ARTICULO 2°.- Dispónese el cese inmediato de la explotación de la actividad objeto de la concesión precaria revocada y arbítrense los medios necesarios conducentes al logro de ese fin.

ARTICULO 3°.- Tome conocimiento a sus efectos y fines pertinentes Administración General de Juegos y Seguros y Fiscalía de Estado.

ARTICULO 4°.- Notifícase a la razón social Inter World S.A. del tenor del presente instrumento, por medio fehaciente.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

ARNOLDO ANIBAL CASTILLO
Gobernador de Catamarca

CPN RAUL ESTEBAN GINE
Ministro de Hacienda y Finanzas